

La señora presidenta y las urgentes DEMANDAS


Pero otros hechos también merecen destacarse. En dos lugares se concentró el porcentaje más alto de votos de la candidata oficialista: el cono urbano bonaerense, que reúne un tercio de la población del país, y las carenciadas provincias del norte, donde el caudillismo pesa fuerte y persisten repudiables prácticas electorales como el clientelismo o el robo de documentos, tal como fue denunciado por una comunidad indígena. No es bueno para la democracia la reelección indefinida, como el cuarto mandato para el gobernador de Formosa, por ejemplo. En cambio, en las principales ciudades del país los triunfos fueron para Carrió en Rosario y Capital Federal; y para Lavagna en Córdoba.

Las falencias observadas indican la necesidad de encaminar reformas políticas que sinceren los mecanismos de representación y contrarresten los manipuleos clientelares, que por cierto también estuvieron en estas elecciones y más para quienes compiten con la ventaja de estar ejerciendo el gobierno.

Advertidos por el escandaloso fraude del pasado 2 de setiembre en las elecciones provinciales de Córdoba, el gobierno nacional procuró mostrar transparencia, aunque no faltaron denuncias de ausencia de votos opositores en los lugares de votación, que el Ministro del Interior Aníbal Fernández contrarrestó derivando la responsabilidad en los fiscales partidarios.

No es bueno mezclar las mañas electorales, que ciertamente deben eliminarse, con un supuesto hastío democrático. Los nostálgicos autoritarios así lo quisieran. Pero la gente común sabe y así lo muestra en su conducta electoral, que caminando por estas mismas imperfecciones es donde conseguirá las soluciones que necesita. No por benevolencia de quienes gobiernan, sino por la persistencia en el reclamo y la participación. Y aquí también están incluidas como demandas las modificaciones y reformas que necesita el sistema político para que los resultados sean cada más expresión de la voluntad de los votantes y no de los mañeros y oportunistas que quieren seguir viviendo de la política.

Que un 46 % de la población se haya definido por la continuidad de los Kirchner en el gobierno significa que existen un conjunto de políticas que se avalan. Pero también expresa la expectativa sobre lo que aún queda como deuda social. Aquí aparece como prioritaria y urgente la distribución de la riqueza, que no admite excusas cuando seguimos



La elección de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de los argentinos no fue una sorpresa, aunque la diferencia con el segundo lugar de Lila Carrió, fue más del esperado. Ni si se hubiesen unido las fuerzas opositoras de Carrió y Lavagna, el tercero, con perfiles de intereses no muy distantes, alcanzaba para superar a la Sra. Cristina. El resto de las opciones, tanto de derecha como de izquierda, quedó en un esfuerzo testimonial, aunque algunos lugares pudieron ocuparse en el poder legislativo, tanto nacional como en algunas provincias con elecciones locales simultáneas.

Algunos agoreros de la prensa destacaron en los días previos el clima apático de la gente hacia las elecciones. Pero el porcentaje de votantes fue importante, ya que se mantuvo en lo habitual. Es probable que haya faltado euforia electoral en la campaña. Pero eso admite otra lectura. La relación de la gente con la política es otra porque el ejercicio democrático del voto ya no es una excepción. Afortunadamente estamos habituándonos a los mecanismos democráticos. Y con ello también pisando mejor la realidad que acota las expectativas de solución a los problemas cotidianos. Experimentamos que la magia democrática no existe. Y nos vamos acostumbrando a que la política no es lo que quisiésemos que fuese, pero tampoco lo que los detractores pregonan. Existe un desgaste inevitable por las deudas pendientes de la democracia. Y es responsabilidad de la dirigencia política, con sus ofertas electorales, que esas deudas vayan siendo saldadas en la democracia, como forma de hacerla creíble y fortalecerla.

en una economía en crecimiento. A propósito, el documento de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) que propone una paritaria y constituyente social, dice que “el crecimiento económico sin modificación del modelo productivo ni de la matriz de distribución, mantiene los condicionamientos estructurales que sostienen la desigualdad pero genera nuevas condiciones para la pelea. Vamos pasando de las luchas defensivas contra los recortes, contra los congelamientos presupuestarios, etc., a los conflictos que ubican como eje el mejoramiento salarial y la registración laboral. Tanto las tasas de ganancia empresarial en aumento, como el superávit fiscal, acompañado de una baja de la tasa de desempleo impulsan esta nueva dinámica social.”

Es claro que los cambios vendrán si se fortalecen los mecanismos de participación popular. Pero esto no se puede dejar en manos del gobierno, porque hasta ahora no ha demostrado decisión política de avanzar en este sentido. Los intentos de nuevas construcciones políticas, más transversales y plurales, quedaron frustrados, quizás por las urgencias electorales que obligaron al Presidente Kirchner a apelar nuevamente a lo peor de la dirigencia revitalizándola para ganar en la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo que antes apeló a la burocracia de los consolidados aparatos sindicales para manejar el reclamo social. Seguramente cuando el actual presidente de la Nación entregue el mando a su esposa se dedicará a la construcción política. Pero difícilmente lo será en el sentido de posibilitar un mayor protagonismo de los sectores populares. Al menos ninguna señal existe hasta el momento.

“La organización territorial – dice la CTA – está llamada a jugar un papel clave en la construcción de nuevas correlaciones de fuerzas que nos permitan al mismo tiempo incidir en las políticas públicas que garanticen a nuestro pueblo acceder a los derechos económicos, sociales y culturales; y generar la masa crítica que entramada con las organizaciones sindicales de la Central y con un conjunto muy amplio de organizaciones por fuera de ella, nos permita avanzar en construir los instrumentos organizativos para profundizar la disputa por la distribución de la riqueza.”

El documento citado, preparatorio del 8vo. Congreso de Delegados de la CTA a realizarse en los primeros días de diciembre señala: “El epílogo del gobierno nacional, que con sus más y con sus menos, integró el mapa político regional de esta nueva etapa histórica, caracterizada por la ruptura con la subordinación automática a los dictados del Consenso de Washington, marca un punto de inflexión a partir del cual se intensificará la tensión entre dos campos de fuerzas que pugnan en sentido contrario. De un lado, los que pretenden abortar cualquier posibilidad de profundizar las transformaciones que demandan los trabajadores y los sectores populares, cuya resistencia puso en crisis a las fuerzas políticas tradicionales que representan los intereses de los factores de poder. Del otro, los que sabemos que si en Argentina y en la región no se avanza en la construcción de nuevas correlaciones de fuerza que fortalezcan la posición de las expresiones identificadas con la democracia, la

justicia social y la autonomía nacional, inexorablemente estaremos ante el inicio de la cuenta regresiva de una etapa de restauración de la gobernabilidad en la versión más ortodoxa del neoliberalismo.” Agrega que esta pelea se da tanto hacia el interior del gobierno como en las distintas expresiones políticas que conforman la oposición. Y advierte que el “núcleo duro” de los que pretenden un viraje de lleno hacia la ortodoxia liberal lo constituye el sector más poderoso del empresariado, que – según lo publicado en Clarín el 24 de agosto pasado – reclaman al próximo gobierno un “paquete de correcciones” que contiene cuestiones como “acuerdo de precios y salarios cada dos años, plan antiinflacionario basado en la contención del gasto público y disciplina fiscal”, es decir, la vieja receta del congelamiento presupuestario y salarial del sector público, aumento tarifario, acuerdo por la deuda con el Club de París, restitución de las relaciones con el Grupo de los 7 y el fin de la puja externa pendiente con los bonistas.

“Demás está decir – concluye la CTA – que si esa fuera la estrategia económica de un próximo gobierno, se desandaría en un tris lo poco que pudimos recuperar los asalariados y, en un breve lapso de tiempo, veríamos expandirse otra vez las cifras de pobreza e indigencia, que dicho sea de paso, aún en sus atemperados niveles actuales hablan de una sociedad con grandes brechas de desigualdad. Esto muestra a las claras que los factores de poder que desmantelaron el aparato productivo durante la década del 90 y se beneficiaron con la privatización de las empresas públicas, siguen pugnando por mantener sus privilegios e incrementar sus cuantiosas ganancias. Y está claro también que agitan el fantasma de las tensiones incontrolables que desataría la puja distributiva, como así también el riesgo de contrariar a los poderosos del mundo con la persistencia en las malas compañías de Chávez y otros vecinos pobres, pues añoran los tiempos en que el rumbo del país lo definía un puñado de tecnócratas empleados del FMI y de las grandes corporaciones.”

Tanto el diagnóstico como la propuesta de la CTA aparecen acertados para el momento actual, porque se carece de una referencia nacional que pueda convocar y articular las múltiples y diversas organizaciones extendidas a lo largo y a lo ancho del país. Y se lo hace no desde el simplismo político que reduce cada movimiento de reclamo o de apoyo como “anti” o “pro” kirchnerista, sino desde una evaluación objetiva del resultado de las políticas que se implementan y de la permeabilidad o no a las demandas sociales que siguen siendo múltiples y más agudas a medida que se abren hacia las realidades más lejanas del interior, en un país macroencefálico que se ha debilitado en su constitución federal y carece de políticas activas para revertir las deformaciones, muchas veces fomentadas por las conveniencias electorales, como viene siendo el manejo discrecional de la coparticipación impositiva y la política de subsidios fundamentalmente al servicio de transporte.-

Octubre 2007

Luis Miguel Baronetto